

TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA

La República Argentina y la Confederación Suiza, en adelante denominadas los Estados Contratantes, con el deseo de celebrar un Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y de ese modo cooperar más eficazmente en la investigación, persecución penal y punición de los delitos, han acordado lo siguiente:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 OBLIGACIÓN DE OTORGAR ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA

1. Los Estados Contratantes se comprometen a otorgarse, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, la más amplia asistencia judicial mutua en todas las investigaciones o procedimientos relativos a delitos cuya punición corresponda a las autoridades competentes del Estado Requirente.
2. Los Estados Contratantes intercambiarán y aceptarán, a través de las Autoridades Centrales, la lista de las autoridades competentes para presentar las solicitudes de asistencia judicial a los fines de este Tratado.
3. El Estado Requerido no invocará el secreto bancario para denegar la asistencia judicial prevista en el presente Tratado.
4. La asistencia judicial mutua incluirá todas las medidas que se adopten a los efectos de un procedimiento penal en el Estado Requirente:
 - a) recepción de declaraciones testimoniales o de otra índole;
 - b) entrega de documentos, expedientes o elementos de prueba;
 - c) localización, incautación y decomiso de objetos y valores;
 - d) intercambio de información;

- e) registro de personas y allanamientos;
- f) devolución de objetos y valores;
- g) notificación de actos procesales;
- h) traslado de personas detenidas para ser interrogadas o sometidas a careo; y
- i) cualquier otro tipo de asistencia mutua compatible con el propósito del presente Tratado y que sea aceptable para los Estados Contratantes.

ARTÍCULO 2 CASOS DE INAPLICABILIDAD

El presente Tratado no se aplicará a los siguientes casos:

- a) búsqueda, arresto o detención de una persona imputada, procesada o condenada por un delito con miras a su extradición;
- b) ejecución de sentencias penales.

ARTÍCULO 3 FUNDAMENTOS PARA DENEGAR O POSPONER LA ASISTENCIA SOLICITADA

1. La asistencia judicial mutua podrá ser denegada:

- a) si la solicitud se refiere a un delito considerado por el Estado Requerido como delito político o relacionado con un delito político;
- b) si la solicitud se refiere a un delito militar que no es delito con arreglo al derecho común;
- c) si la solicitud se refiere a infracciones fiscales; sin embargo el Estado Requerido tiene la facultad de acceder a la solicitud si la investigación o el procedimiento se refiere a una estafa en materia fiscal. Si la solicitud se refiere sólo en parte a infracciones fiscales, el Estado Requerido puede limitar, para esa parte, la utilización de las informaciones y medios de prueba suministrados;
- d) si el Estado Requerido considera que el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales, según lo determinado por su autoridad competente;
- e) si la solicitud se refiere a hechos con respecto a los cuales la persona perseguida ha sido definitivamente absuelta o condenada en el Estado Requerido por los mismos hechos, a condición que la sanción pronunciada esté en curso de ejecución o ya haya sido ejecutada;
- f) si existen motivos fundados para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivos relacionados con su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones políticas, o que dar curso a la solicitud perjudicaría a dicha persona por cualquiera de las razones mencionadas;

- g) si existen motivos fundados para creer que el procedimiento penal iniciado contra la persona no respeta las garantías contenidas en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, especialmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966.
- 2. El Estado Requerido podrá posponer el cumplimiento de la asistencia si ésta perjudicare un procedimiento penal en curso en ese Estado.
- 3. Antes de denegar o posponer la asistencia de conformidad con el presente artículo, el Estado Requerido:
 - a) informará de inmediato al Estado Requirente las razones que lo motivan para denegar o postergar la asistencia; y
 - b) considerará si la asistencia judicial podrá otorgarse bajo las condiciones que estime necesarias. En tal caso, dichas condiciones serán respetadas en el Estado Requirente.
- 4. La denegación de la asistencia, sea total o parcial, deberá estar fundamentada.

ARTÍCULO 4 TIPO DE DELITO

A los efectos de la aplicación del presente Tratado no se considerarán delitos políticos aquellos que:

- a) tienden a exterminar u oprimir a un grupo de personas en razón de su nacionalidad, raza, confesión o pertenencia étnica, social o política;
- b) resultan especialmente reprochables debido a que el autor, con la finalidad de extorsionar o de coaccionar, ha puesto o podría haber puesto en peligro la libertad, la vida, o la integridad física de personas, especialmente por un secuestro de avión, la toma de rehenes o el empleo de medios de exterminación masiva; o
- c) constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario, en especial el contemplado en las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales.

TÍTULO II EXHORTOS

ARTÍCULO 5 DERECHO APLICABLE

- 1. La solicitud será ejecutada con arreglo a las leyes del Estado Requerido.

2. Si el Estado Requirente desea la aplicación de un procedimiento específico con respecto al cumplimiento de una solicitud, lo deberá pedir expresamente, y el Estado Requerido cumplirá con la misma siempre que ello no sea contrario a sus leyes.

ARTÍCULO 6 MEDIDAS DE COERCIÓN

1. El cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de un delito penal reprimido por las leyes del Estado Requerido, como si se hubiera cometido en su territorio.
2. Cuando se requiera la doble incriminación penal para otorgar asistencia judicial, dicho requisito deberá considerarse cumplido sin tener en cuenta si ambos Estados Contratantes ubican al delito dentro de la misma categoría, o si lo denominan con la misma terminología, siempre que ambos Estados tipifiquen la conducta subyacente al delito.

ARTÍCULO 7 MEDIDAS PROVISORIAS

1. A pedido expreso del Estado Requirente, y siempre que el procedimiento previsto por la solicitud no parezca manifiestamente inadmisible o inoportuno de acuerdo a la legislación del Estado Requerido, la autoridad competente del Estado Requerido ordenará medidas provisorias para mantener una situación existente, proteger intereses jurídicos amenazados o preservar elementos de prueba.
2. Si una demora pudiera poner en peligro los procedimientos y la información suministrada permitiera determinar que se cumplen todas las condiciones, podrán disponerse tales medidas tan pronto como se comunique anticipadamente la solicitud. Dichas medidas se levantarán si el Estado Requirente no presenta la solicitud dentro del plazo establecido a tal fin.

ARTÍCULO 8 PRESENCIA DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO

En caso de solicitud expresa del Estado Requirente, la Autoridad Central del Estado Requerido le comunicará la fecha y lugar de ejecución de la solicitud. Las autoridades y personas interesadas podrán estar presentes si el Estado Requerido otorga su consentimiento a tal fin.

ARTÍCULO 9
DECLARACIONES DE TESTIGOS EN EL ESTADO REQUERIDO

1. Los testigos serán oídos de conformidad con la legislación del Estado Requerido. Sin embargo, podrán negarse a declarar en caso de que la legislación del Estado Requirente lo permita.
2. Si la negativa a declarar se basa en la legislación del Estado Requirente, el Estado Requerido remitirá el expediente al Estado Requirente para que éste resuelva. La decisión deberá estar fundamentada.
3. El testigo que invoque el derecho a negarse a declarar no será pasible de una sanción legal en el Estado Requirente por esa razón.

ARTÍCULO 10
ENVÍO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES
U OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA

1. El Estado Requerido enviará objetos, documentos, expedientes o elementos de prueba al Estado Requirente cuando éste así lo solicite.
2. El Estado Requerido podrá optar por enviar únicamente copias de los documentos, expedientes o elementos de prueba solicitados. Si el Estado Requirente solicita expresamente el envío de originales, el Estado Requerido hará todo lo posible para cumplir con la solicitud.
3. El Estado Requirente deberá devolver los originales lo antes posible y a más tardar después de finalizada la causa, salvo que el Estado Requerido renuncie a su devolución.
4. Los derechos reclamados por terceros con respecto a los objetos, documentos, expedientes o elementos de prueba en el Estado Requerido no impedirán la remisión de los mismos al Estado Requirente.

ARTÍCULO 11
EXPEDIENTES JUDICIALES O DE INSTRUCCIÓN

1. El Estado Requerido pondrá a disposición, a pedido de las autoridades del Estado Requirente, los expedientes judiciales o de instrucción, incluidas las sentencias y resoluciones, en caso de que dichos elementos sean importantes para un procedimiento judicial.
2. La documentación, expedientes y pruebas se entregarán únicamente cuando se relacionen con una cuestión ya resuelta o bien en la medida en que la Autoridad Central del Estado Requerido lo estime admisible.

ARTÍCULO 12 DEVOLUCIÓN DE OBJETOS Y VALORES

1. Los objetos y valores que constituyen el producto o el instrumento del delito cometido y perseguido por el Estado Requirente y que hayan sido incautados por el Estado Requerido, como así también los bienes sustitutivos cuyo valor se corresponda con el del producido del delito podrán asimismo ser devueltos al Estado Requirente a los efectos de su decomiso, ello sujeto a las tercerías de mejor derecho presentadas por un tercero de buena fe con relación a dichos objetos y valores.
2. Como regla general, la devolución tendrá lugar en caso de sentencia firme y ejecutoria del Estado Requirente.

ARTÍCULO 13 USO RESTRINGIDO

1. La información, documentación u objetos obtenidos en virtud de la solicitud de asistencia judicial no podrán utilizarse en el Estado Requirente a los fines de investigaciones ni tampoco presentarse como elementos de prueba en ningún procedimiento penal relativo a un delito respecto del cual no se pueda otorgar la asistencia judicial.
2. Cualquier otra utilización estará sujeta a la previa autorización de la Autoridad Central del Estado Requerido. No se requerirá dicha autorización cuando:
 - a) los hechos que den lugar a la solicitud constituyan otro delito con relación al cual se pueda otorgar la asistencia judicial;
 - b) el procedimiento penal extranjero se dirija contra otras personas que hayan participado en la comisión del delito; o bien
 - c) el material se utilice para una investigación o procedimiento relativo al pago de daños y perjuicios en virtud de una causa respecto de la cual se haya otorgado la asistencia judicial.

TÍTULO III NOTIFICACIÓN Y COMPARECENCIA

ARTÍCULO 14 NOTIFICACIÓN DE ACTOS PROCESALES Y SENTENCIAS JUDICIALES

1. El Estado Requerido procederá, de conformidad con sus leyes, a notificar los actos procesales y fallos judiciales que el Estado Requirente le envíe a tal fin.

2. Dicha notificación podrá efectuarse mediante la simple comunicación del acto o decisión al destinatario. En caso que el Estado Requirente lo solicite en forma expresa, el Estado Requerido efectuará la notificación en una de las formas previstas por sus leyes para comunicaciones análogas o de una manera especial compatible con dichas leyes.
3. La notificación se probará mediante un acuse de recibo fechado y firmado por el destinatario o bien a través de una declaración del Estado Requerido en la que conste el hecho, forma y fecha de la notificación. Se remitirá inmediatamente uno de estos documentos al Estado Requirente, a solicitud del cual el Estado Requerido especificará si la notificación se ha realizado con arreglo a sus leyes. Si la notificación no ha podido realizarse, el Estado Requerido informará inmediatamente el motivo al Estado Requirente.
4. La solicitud tendiente a la notificación de una citación a comparecer a una persona imputada que se encuentre en el territorio del Estado Requerido deberá hacerse llegar a la Autoridad Central de dicho Estado a más tardar cuarenta y cinco días antes de la fecha fijada para la comparecencia.

ARTÍCULO 15 COMPARECENCIA DE TESTIGOS O PERITOS EN EL ESTADO REQUIRENTE

1. En caso que el Estado Requirente considere necesaria la comparecencia personal de un testigo o perito ante sus autoridades judiciales, deberá manifestarlo en su pedido de notificación de la citación.
2. El destinatario será invitado por el Estado Requerido a responder a la citación. El Estado Requerido comunicará sin demora al Estado Requirente la respuesta del destinatario.
3. El destinatario de la citación que acepte comparecer en el Estado Requirente podrá solicitar que dicho Estado le entregue un adelanto para sus gastos de viaje y viáticos.

ARTÍCULO 16 INDEMNIZACIONES

Las indemnizaciones a ser abonadas, como así también los gastos de viaje y estadía a ser reembolsados a un testigo o perito por el Estado Requirente, se calcularán a partir de su lugar de residencia y se le otorgarán de acuerdo a escalas por lo menos equivalentes a las contempladas en las tarifas y reglamentos vigentes en el país donde deba realizarse la audiencia.

ARTÍCULO 17 NO COMPARECENCIA

El testigo o perito que no hubiera respondido a una citación cuya notificación haya sido solicitada, aún cuando la citación incluyera una conminación, no estará sujeto a ninguna sanción ni medida de coerción a menos que posteriormente ingrese voluntariamente al territorio del Estado Requirente y se lo vuelva a citar allí debidamente.

ARTÍCULO 18 SALVOCONDUCTO

1. Ningún testigo o perito cualquiera sea su nacionalidad, que se presente en virtud de una citación ante las autoridades judiciales del Estado Requirente, podrá ser imputado, procesado, detenido, ni sometido a ningún otro tipo de restricción de su libertad personal en el territorio de dicho Estado con relación a hechos o condenas anteriores a su partida del territorio del Estado Requerido.
2. Ninguna persona, cualquiera sea su nacionalidad, que haya sido citada por las autoridades judiciales del Estado Requirente para responder por actos que constituyan el objeto de un proceso en su contra, podrá ser imputada, procesada, detenida, ni sometida a ningún otro tipo de restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio del Estado Requerido y que no fueran contemplados por la citación.
3. La inmunidad prevista por el presente artículo cesará cuando la persona en cuestión, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Requirente por un período de treinta días consecutivos a partir de la fecha en que su presencia dejara de ser requerida, hubiera permanecido, sin embargo, en dicho territorio o, habiendo partido, hubiera regresado.

ARTÍCULO 19 ALCANCE DE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL ESTADO REQUIRENTE

1. La persona que comparezca en el Estado Requirente en virtud de una citación no podrá ser obligada a prestar declaración o a presentar pruebas cuando las leyes de uno u otro de los Estados Contratantes le permitan negarse a hacerlo.
2. Los artículos 9, párrafos 2 y 3, y 13, párrafo 1, se aplicarán por analogía.

ARTÍCULO 20 TRASLADO DE PERSONAS DETENIDAS

1. Toda persona detenida cuya comparecencia personal en calidad de testigo o a los fines de un careo haya sido solicitada por el Estado Requirente será trasladada temporariamente al territorio en el cual deba realizarse la audiencia, bajo la condición de ser devuelta dentro del período estipulado por el Estado Requerido y con sujeción a las disposiciones del artículo 18, en la medida en que éstas sean aplicables.
2. El traslado podrá ser denegado en los siguientes casos:
 - a. si la persona detenida no otorga su consentimiento;
 - b. si su presencia es requerida en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado Requerido;
 - c. si su traslado es susceptible de prolongar su detención; o
 - d. si existen otras razones imperiosas para no trasladarla al territorio del Estado Requirente.
3. Si la pena impuesta a la persona trasladada bajo este artículo expira mientras ésta se encuentra en el Estado Requirente, el Estado Requerido ordenará su libertad en cuyo caso su situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 15, y se le otorgarán las inmunidades previstas en el artículo 18.
4. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio del Estado Requirente, salvo que el Estado Requerido solicite su liberación.
5. El período durante el cual la persona está detenida fuera del Estado Requerido será computado a los efectos de su prisión preventiva y su condena.

ARTÍCULO 21 AUDIENCIA POR VIDEOCONFERENCIA

1. En caso que una persona que se encuentre en el territorio del Estado Requerido deba declarar en carácter de testigo o perito ante las autoridades judiciales del Estado Requirente, este último podrá solicitar, cuando resulte inconveniente o imposible que la persona que deba declarar comparezca en persona en su territorio, que la audiencia se realice por videoconferencia, de conformidad con los párrafos 2 a 7 del presente artículo.
2. El Estado Requerido aceptará la audiencia por videoconferencia siempre que dicho método no sea contrario a sus principios jurídicos fundamentales y siempre que disponga de los medios técnicos que permitan realizar dicha audiencia. En caso que el Estado Requerido no

disponga de los medios técnicos necesarios para la realización de una videoconferencia, dichos medios, con su consentimiento, podrán ser puestos a su disposición por el Estado Requerente.

3. Las solicitudes de realización de audiencias por videoconferencia contendrán, además de las informaciones indicadas en el artículo 25, la razón por la cual es inconveniente o imposible que el testigo o perito comparezca personalmente en la audiencia, el nombre de la autoridad judicial y de las personas que procederán a la audiencia.
4. La autoridad judicial del Estado Requerido citará a la persona en cuestión a comparecer con arreglo a las formas previstas por su legislación.
5. Se aplicarán las siguientes reglas a las audiencias por videoconferencia:
 - a) la audiencia se realizará con la presencia de una autoridad judicial del Estado Requerido, si es necesario con la asistencia de un intérprete; dicha autoridad será también responsable de asegurar tanto la identificación de la persona que habrá de declarar como el respeto de los principios fundamentales del derecho del Estado Requerido. Si la autoridad judicial del Estado Requerido considera que durante la audiencia no se están respetando los principios fundamentales del derecho del Estado Requerido, deberá tomar de inmediato las medidas necesarias para asegurar la continuación de la audiencia cumpliendo con los principios arriba mencionados;
 - b) las autoridades competentes de los Estados Contratantes acordarán, en su caso, las medidas relativas a la protección de la persona a ser oída;
 - c) el interrogatorio será realizado directamente por la autoridad judicial del Estado Requerente o bajo su dirección de conformidad con su propia legislación;
 - d) a solicitud del Estado Requerente o de la persona a ser oída, el Estado Requerido se asegurará de que ésta última sea asistida de ser necesario, por un intérprete; y
 - e) la persona a ser oída podrá hacer valer el derecho de no declarar que le reconozca la legislación del Estado Requerido o la del Estado Requerente.
6. Sin perjuicio de todas las medidas acordadas en lo relativo a la protección de personas, la autoridad judicial del Estado Requerido, al finalizar la audiencia, labrará un acta en la que conste la fecha y lugar de la audiencia, la identidad de la persona oída, las identidades y funciones de todas las otras personas del Estado Requerido que hayan participado en la audiencia, los eventuales juramentos tomados y las condiciones técnicas en virtud de las cuales se ha celebrado la audiencia. El

documento será enviado por la autoridad competente del Estado Requerido a la autoridad competente del Estado Requirente.

7. Cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para que cuando se interrogue a testigos o peritos dentro de su territorio, de conformidad con el presente artículo, y éstos se nieguen a declarar cuando tengan la obligación de hacerlo o bien realicen declaraciones falsas, se aplique su legislación tal como si la audiencia se realizara en el marco de un procedimiento nacional.
8. Cada Estado Contratante podrá asimismo, si así lo desea, aplicar las disposiciones del presente artículo, cuando corresponda y con el consentimiento de las autoridades judiciales competentes, a las audiencias por videoconferencia en las que participe la persona perseguida penalmente o sospechosa. En tal caso, la decisión de realizar una videoconferencia, y el modo en que se llevará a cabo la misma, se regirán por un acuerdo entre los Estados Contratantes, de conformidad con su legislación nacional y los instrumentos internacionales sobre la materia. Las audiencias de personas imputadas o sospechosas sólo se realizarán con el consentimiento de éstas.

TÍTULO IV

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES E INTERCAMBIO DE NOTIFICACIONES DE CONDENA

ARTÍCULO 22

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES E INTERCAMBIO DE NOTIFICACIONES DE CONDENA

1. El Estado Requerido comunicará, en la medida en que sus autoridades pudieran ellas mismas obtenerlos en un caso semejante, los extractos del expediente judicial o las informaciones relativas a este último que le sean solicitadas por el Estado Requirente para atender a las necesidades de una causa penal.
2. En los casos que no sean los previstos por el párrafo 1 del presente artículo, se dará curso a la solicitud en las condiciones previstas por la legislación, reglamentos o prácticas del Estado Requerido.
3. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro Estado las sentencias penales y medidas posteriores relativas a los nacionales de dicho Estado y que hayan sido inscriptas en el expediente judicial.

TÍTULO V PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 23 AUTORIDAD CENTRAL

1. A los efectos del presente Tratado, la Autoridad Central es, para la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y para Suiza, la Oficina Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y Policía, por intermedio de las cuales se presentarán y recibirán las solicitudes de Asistencia Judicial Mutua.
2. Las Autoridades Centrales de los Estados Contratantes se comunicarán directamente entre sí, sin perjuicio de lo cual, de ser necesario, quedará reservada la vía diplomática.

ARTÍCULO 24 VÍAS DE TRANSMISIÓN Y FORMA

La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito. En caso de urgencia podrá transmitirse por fax, por medios electrónicos de comunicación o por intermedio de la Organización Internacional de la Policía Criminal, debiendo confirmarse con la solicitud original.

ARTÍCULO 25 CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud deberá indicar:
 - a) la autoridad de la cual emana y, en caso de corresponder, la autoridad a cargo del proceso penal en el Estado Requiriente;
 - b) el objeto y la razón de la solicitud;
 - c) una descripción detallada de las medidas de asistencia judicial solicitadas;
 - d) de ser posible, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección de la persona objeto del proceso penal al momento de presentación de la solicitud;
 - e) el motivo principal en razón del cual se solicitan pruebas o información; y
 - f) cuando no se trate de una solicitud de notificación de las previstas en el artículo 14, deberá efectuarse una descripción de los hechos que dieron origen a la investigación en el Estado Requiriente -fecha, lugar y circunstancias en las cuales se cometió el delito- así como la vinculación entre los hechos mencionados en la solicitud y las medidas requeridas.

2. Además, la solicitud deberá contener:

- a) en caso de aplicación del derecho extranjero con relación a la ejecución de conformidad con el artículo 5, párrafo 2, el texto de las disposiciones legales aplicables en el Estado Requiriente, y la razón de su aplicación;
- b) en caso de participación de personas de conformidad con el artículo 8, la designación de la persona que deberá estar presente en la ejecución de la solicitud, y la razón de su presencia;
- c) en caso de notificación de actos procesales y citaciones de conformidad con los artículos 14 y 15, el nombre y la dirección del destinatario de la documentación y las citaciones a enviar;
- d) en caso de citación de testigos o peritos de conformidad con el artículo 15, una declaración de la cual surja que el Estado Requiriente se hará cargo de los gastos y viáticos y que pagará un adelanto en caso de solicitarse;
- e) en caso de traslado de personas detenidas de conformidad con el artículo 20, los nombres de éstas;
- f) en caso de audiencias por videoconferencia de conformidad con el artículo 21, el motivo por el cual es inconveniente o imposible que el testigo o perito comparezca, además del nombre de la autoridad judicial y de las personas que conducirán la audiencia.

ARTÍCULO 26
CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD

- 1. En caso que la solicitud no cumpla con las disposiciones del presente Tratado, la Autoridad Central del Estado Requerido informará sin demora a la Autoridad Central del Estado Requiriente y le pedirá que la modifique o complete. Lo dispuesto en el presente párrafo no impedirá la adopción de las medidas provisionales contempladas en el artículo 7.
- 2. Si la Autoridad Central del Estado Requerido considera que la solicitud se ha efectuado de conformidad con el presente Tratado, ésta adoptará sin demora las medidas necesarias para su ejecución.
- 3. Después de haber dado cumplimiento a la solicitud, la autoridad competente enviará a la Autoridad Central del Estado Requerido la solicitud, la información y las pruebas obtenidas. La Autoridad Central verificará el debido cumplimiento de la solicitud y comunicará los resultados a la Autoridad Central del Estado Requiriente.
- 4. Lo dispuesto en el párrafo 3 no impedirá una ejecución parcial de la solicitud de asistencia.

ARTÍCULO 27
EXENCIÓN DE LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES
Y OTRAS FORMALIDADES

1. Los documentos, expedientes, declaraciones y demás elementos de prueba enviados en virtud de la aplicación del presente Tratado estarán exentos de legalización, de certificación y de otras formalidades.
2. Los documentos, expedientes, declaraciones o demás elementos de prueba enviados por la Autoridad Central del Estado Requerido serán aceptados como prueba sin necesidad de otra formalidad o certificación de autenticidad.
3. La nota de envío de la Autoridad Central será garantía de la autenticidad de los documentos transmitidos.

ARTÍCULO 28
IDIOMA

1. Las solicitudes de asistencia judicial mutua, como así también sus anexos, se redactarán en el idioma del Estado Requirente y estarán acompañadas de una traducción en el idioma del Estado Requerido indicada en cada caso por la Autoridad Central.
2. La traducción de los documentos elaborados u obtenidos en el marco de la ejecución de la solicitud le corresponderá al Estado Requirente.

ARTÍCULO 29
GASTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD

1. El Estado Requirente, a solicitud del Estado Requerido, sólo reembolsará los siguientes gastos incurridos a los efectos de la tramitación de una solicitud:
 - a) indemnizaciones, viáticos y gastos de viaje de los testigos;
 - b) gastos relativos al traslado de personas detenidas;
 - c) honorarios, gastos de viaje, viáticos y gastos de peritaje;
 - d) los gastos de la conexión de video, y aquellos vinculados con la puesta en funcionamiento de dicha conexión en el Estado Requerido, la remuneración de los intérpretes que éste pone a disposición y las indemnizaciones pagadas a los testigos así como sus gastos de traslado en el Estado Requerido, a menos que los Estados Contratantes, no adopten otra decisión.
2. Si resultara evidente que el cumplimiento de la solicitud acarree gastos extraordinarios, el Estado Requerido informará la situación al Estado Requirente para determinar las condiciones a las que estará sujeto el cumplimiento de la solicitud.

TÍTULO VI
ENVÍO SIN SOLICITUD, DENUNCIA CON FINES
DE PROCESAMIENTO Y DECOMISO

ARTÍCULO 30
ENVÍO SIN SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PRUEBA E INFORMACIÓN

1. Dentro de los límites de su legislación nacional, las autoridades podrán, por intermedio de las Autoridades Centrales, sin que se haya presentado una solicitud en tal sentido, intercambiar información y elementos probatorios en relación con los hechos penalmente punibles que surjan de su propia investigación cuando estimen que enviarla podrá permitirle al Estado Contratante destinatario:
 - a) presentar una solicitud de asistencia judicial en virtud del presente Tratado;
 - b) iniciar una causa penal; o
 - c) facilitar el desarrollo de una investigación penal en curso.
2. La autoridad que suministre la información y los elementos probatorios, con arreglo a su legislación nacional, podrá supeditar su utilización por parte de la autoridad destinataria a determinadas condiciones. La autoridad destinataria deberá respetar dichas condiciones.

ARTÍCULO 31
DENUNCIA CON FINES DE PROCESAMIENTO Y DECOMISO

1. Toda denuncia dirigida por un Estado Contratante con miras a un procesamiento ante los tribunales del otro Estado o a un decomiso de bienes provenientes de un delito será objeto de comunicaciones entre las Autoridades Centrales.
2. La Autoridad Central del Estado Requerido informará el curso dado a la denuncia y remitirá, en caso de corresponder, una copia de la resolución adoptada.
3. Las disposiciones del artículo 27 se aplicarán a las denuncias contempladas por el párrafo 1 del presente artículo.

ARTÍCULO 32
TRADUCCIÓN

El envío sin solicitud de conformidad con el artículo 30, así como la denuncia de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, deberán traducirse; sin embargo sus anexos estarán exentos de traducción.

TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33 OTROS ACUERDOS O CONVENIOS

1. Las disposiciones del presente Tratado no impedirán la asistencia más amplia que haya sido o sea convenida entre los Estados Contratantes, en otros acuerdos o convenios, o que resultase de la legislación interna o de una práctica establecida.
2. Los artículos XV, XVI y XVII del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la Confederación Suiza del 21 de noviembre de 1906 quedarán derogados a partir de la entrada en vigor del presente Tratado.

ARTÍCULO 34 CONSULTAS

Si lo consideran necesario, las Autoridades Centrales, verbalmente o por escrito, intercambiarán opiniones sobre la aplicación o la ejecución del presente Tratado, de manera general o en caso particular.

ARTÍCULO 35 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias entre los Estados Contratantes relativas a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado serán solucionadas a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO 36 ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

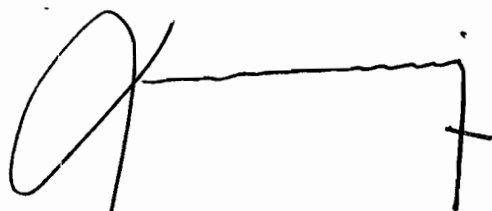
1. El presente Tratado entrará en vigor sesenta días después de la fecha en la cual los Estados contratantes se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos constitucionales requeridos a tal efecto.
2. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación por escrito al otro Estado por la vía diplomática. La denuncia tendrá efecto a los seis meses contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación. Sin embargo, la denuncia no afectará los casos de asistencia judicial en trámite.

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente autorizados a tal fin por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Tratado.

Hecho en Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2009, en dos ejemplares en castellano y en francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Argentina

Por la Confederación Suiza

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right, ending in a small vertical stroke.

Jorge Enrique Taiana
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'C' at the beginning, followed by several loops and a final vertical stroke.

Carla Del Ponte
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

TRAITE
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
ENTRE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
ET LA CONFEDERATION SUISSE

La République Argentine et la Confédération suisse, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses de conclure un Traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
OBLIGATION D'ACCORDER L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large dans toute enquête ou procédure relative à des infractions dont la compétence relève des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
2. Les Etats contractants s'échangent et acceptent, par leurs Autorités centrales, la liste des autorités compétentes pour présenter des demandes d'entraide judiciaire aux fins du présent Traité.
3. L'Etat requis ne pourra invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue dans le présent Traité.
4. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant:
 - a) la réception de témoignages ou d'autres déclarations;
 - b) la remise de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve;
 - c) le dépistage, la saisie et la confiscation d'objets et de valeurs;
 - d) l'échange de renseignements;
 - e) la fouille de personnes et la perquisition;
 - f) la restitution d'objets et de valeurs;
 - g) la notification d'actes de procédure;
 - h) la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation; et
 - i) toute autre mesure d'entraide compatible avec les buts de ce Traité et qui est acceptable pour les Etats contractants.

ARTICLE 2 INAPPLICABILITE

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants:

- a) la recherche, l'arrestation ou la détention d'une personne poursuivie ou jugée pénalement en vue de son extradition;
- b) l'exécution de jugements pénaux.

ARTICLE 3 MOTIFS POUR REFUSER OU DIFFERER L'EXECUTION DE LA DEMANDE

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée:

- a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;
- b) si la demande concerne des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;
- c) si la demande se rapporte à des infractions fiscales; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. Si la demande se rapporte en partie seulement à des infractions fiscales, l'Etat requis peut limiter, pour cette partie, l'utilisation des informations et moyens de preuve fournis;
- d) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité compétente;
- e) si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante, quant à l'essentiel, à condition que la sanction prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée;
- f) s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou ses opinions politiques ou que donner suite à la demande porterait préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons;
- g) s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale contre la personne concernée ne respecte pas les garanties contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.
3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'Etat requis:
 - a) informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
 - b) examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
4. Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.

ARTICLE 4 NATURE DE L'INFRACTION

Pour l'application du présent Traité, ne seront pas considérées comme infractions politiques, celles qui:

- a) tendent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; *
- b) semblent particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs ou
- c) constituent une violation grave du droit international humanitaire, notamment au sens des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels.

TITRE II COMMISSIONS ROGATOIRES

ARTICLE 5 DROIT APPLICABLE

1. La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.
2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution de la demande d'entraide, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

ARTICLE 6 MESURES DE CONTRAINTE

1. L'exécution d'une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.
2. Si la double incrimination est nécessaire pour accorder l'entraide judiciaire, cette condition doit être considérée remplie sans prendre en compte si les Etats contractants placent l'infraction dans la même catégorie, ou s'ils la qualifient avec la même terminologie, pour autant que les Etats répriment le comportement sous-jacent à l'infraction.

ARTICLE 7 MESURES PROVISOIRES

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant, et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.
2. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, ces mesures peuvent également être ordonnées dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat requérant ne dépose pas la demande d'entraide dans le délai imparti à cet effet.

ARTICLE 8 PRESENCE DE PERSONNES QUI PARTICIPENT A LA PROCEDURE

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.

ARTICLE 9 DEPOSITIONS DE TEMOINS DANS L'ETAT REQUIS

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.
3. Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

ARTICLE 10 REMISE DE DOCUMENTS, DE DOSSIERS OU D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, sur demande de ce dernier, des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.
2. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.
3. L'Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce.
4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

ARTICLE 11 DOSSIERS DE TRIBUNAUX OU D'INSTRUCTION

1. Sur demande, l'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction -y compris les jugements et décisions- si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.
2. Les pièces, dossiers et moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou, sinon, dans la mesure jugée admissible par l'Autorité centrale de l'Etat requis.

ARTICLE 12 RESTITUTION D'OBJETS ET DE VALEURS

1. Les objets et valeurs qui constituent le produit ou l'instrument d'une infraction commise et poursuivie par l'Etat requérant et qui ont été saisis par l'Etat requis ainsi que les biens de remplacement dont la valeur correspond à ces produits peuvent également être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation, sous réserve des prétentions élevées par un tiers de bonne foi sur ces objets et valeurs.

2. La restitution intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant.

ARTICLE 13 UTILISATION RESTREINTE

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie.
2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
 - a) les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée;
 - b) la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction; ou
 - c) le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

TITRE III NOTIFICATION ET COMPARUTION

ARTICLE 14 NOTIFICATION D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES

1. L'Etat requis procédera, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
2. Cette notification pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
3. La preuve de la notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été faite conformément à sa loi. Si

la notification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

4. La demande tendant à la notification d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution.

ARTICLE 15 COMPARUTION DE TÉMOINS OU D'EXPERTS DANS L'ETAT REQUERANT

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est nécessaire, il en fera mention dans la demande de notification de la citation.
2. Le destinataire est invité par l'Etat requis à répondre à la citation. L'Etat requis communiquera, sans délai, la réponse du destinataire à l'Etat requérant.
3. Le destinataire de la citation qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

ARTICLE 16 INDEMNITES

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

ARTICLE 17 DEFAULT DE COMPARUTION

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

ARTICLE 18 SAUF-CONDUIT

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaitra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, détenue, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.
3. La protection prévue au présent article cessera lorsque la personne qui en a fait l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

ARTICLE 19 ETENDUE DU TEMOIGNAGE DANS L'ETAT REQUERANT

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, lorsque le droit de l'un ou l'autre des Etats contractants lui permet de refuser.
2. Les articles 9, paragraphes 2 et 3, et 13, paragraphe 1, s'appliquent par analogie.

ARTICLE 20 REMISE DE PERSONNES DETENUES

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 18, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
2. La remise pourra être refusée:
 - a) si la personne détenue n'y consent pas;

- b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;
 - c) si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou
 - d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.
3. Si la peine imposée à la personne remise en vertu de cet article vient à échoir pendant que celle-ci se trouve dans l'Etat requérant, l'Etat requis ordonne sa liberté, auquel cas sa situation est régie par les dispositions de l'article 15 et les immunités prévues à l'article 18 lui seront accordées.
 4. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.
 5. Le temps durant lequel la personne sera détenue en dehors de l'Etat requis sera pris en compte concernant sa détention préventive et sa peine.

ARTICLE 21 AUDITION PAR CONFERENCE VIDEO

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par conférence vidéo, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2. L'Etat requis consent à l'audition par conférence vidéo pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une conférence vidéo, l'Etat requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat requis avec l'accord de ce dernier.
3. Les demandes d'audition par conférence vidéo contiennent, outre les informations indiquées à l'article 25, la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de l'Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par conférence vidéo:
 - a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat requis, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable

de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'Etat requis. Si l'autorité judiciaire de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l'Etat requis ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

- b) les autorités compétentes des Etats contractants conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
 - c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
 - d) à la demande de l'Etat requérant ou de la personne à entendre, l'Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète; et
 - e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la législation soit de l'Etat requis soit de l'Etat requérant.
6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat requis à l'autorité compétente de l'Etat requérant.
7. Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s'applique comme elle s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
8. Chaque Etat contractant peut, s'il le souhaite, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de son autorité judiciaire compétente, aux auditions par conférence vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la conférence vidéo et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.

TITRE IV
CASIER JUDICIAIRE ET ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

ARTICLE 22
CASIER JUDICIAIRE ET ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.
3. Chacun des Etats contractants donne à l'autre Etat avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

TITRE V
PROCEDURE

ARTICLE 23
AUTORITE CENTRALE

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour l'Argentine, le Ministère des Affaires Etrangères, Commerce International et du Culte et pour la Suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, par l'intermédiaire desquelles seront présentées et reçues les demandes d'entraide judiciaire.
2. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles; la voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

ARTICLE 24
VOIES DE TRANSMISSION ET FORME

La demande d'entraide doit être formulée par écrit. En cas d'urgence elle pourra être transmise par fax, par des moyens électroniques de communication ou par la voie de l'Organisation Internationale de la Police Criminelle, et doit être confirmée au travers de l'envoi de la demande originale.

ARTICLE 25 CONTENU DE LA DEMANDE

1. La demande doit contenir les indications suivantes:
 - a) l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;
 - b) l'objet et le motif de la demande;
 - c) une description détaillée des mesures d'entraide requises;
 - d) dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande;
 - e) la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés; et
 - f) sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'article 14, la demande devra contenir une description des faits donnant lieu à l'investigation dans l'Etat requérant -date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise- ainsi que le lien entre les faits mentionnés dans la demande d'entraide et les mesures requises.

2. Au surplus, la demande contiendra:
 - a) en cas d'application du droit étranger, lors de l'exécution conformément à l'article 5, paragraphe 2, le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;
 - b) en cas de participation de personnes selon l'article 8, la désignation de la personne qui doit assister à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;
 - c) en cas de notification d'actes de procédure et de citations, comme prévu aux articles 14 et 15, le nom et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;
 - d) en cas de citation de témoins ou d'experts, conformément à l'article 15, une indication selon laquelle l'Etat requérant prend en charge les frais et les indemnités et qu'il versera une avance si elle est demandée;
 - e) en cas de remise de personnes détenues conformément à l'article 20, le nom de ces dernières;
 - f) en cas d'audition par conférence vidéo selon l'article 21, le motif pour lequel il est inopportun ou impossible au témoin ou à l'expert de comparaître ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

ARTICLE 26 EXECUTION DE LA DEMANDE

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l'adoption de mesures provisoires au sens de l'article 7.
2. Si l'Autorité centrale de l'Etat requis considère que la demande a été effectuée conformément au présent Traité, celle-ci prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de son exécution.
3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que la demande a été dûment exécutée et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.
4. Le paragraphe 3 n'empêche pas une exécution partielle de la demande d'entraide judiciaire.

ARTICLE 27 DISPENSE DE LEGALISATION ET D'AUTHENTIFICATION ET AUTRES FORMALITES

1. Les documents, dossiers, dépositions ou autres éléments de preuve transmis en application du présent Traité seront dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.
2. Les documents, dossiers ou dépositions ou autres éléments de preuve transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.
3. La lettre de transmission de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

ARTICLE 28 LANGUE

1. Les demandes d'entraide ainsi que ses pièces annexes seront rédigées dans la langue de l'Etat requérant et seront accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis indiquée de cas en cas par l'Autorité centrale.
2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

ARTICLE 29
FRAIS LIES A L'EXECUTION DE LA DEMANDE

1. L'Etat requérant rembourse, à la demande de l'Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l'exécution d'une demande:
 - a) indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins;
 - b) dépenses relatives au transport de personnes détenues;
 - c) honoraires, frais de voyage et de séjour ainsi que les frais liés à l'expertise;
 - d) le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis, à moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement.
2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

TITRE VI
TRANSMISSION SANS DEMANDE; DÉNONCIATION AUX FINS DE
POURSUITES ET DE CONFISCATION

ARTICLE 30
TRANSMISSION DE MOYENS DE PREUVE ET D'INFORMATIONS
SANS DEMANDE

1. Dans les limites de leur droit national, les autorités peuvent, par l'intermédiaire des Autorités centrales respectives, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables recueillis au cours de leur propre enquête, lorsqu'elles estiment que cette transmission est de nature à permettre à l'Etat contractant destinataire:
 - a) de présenter une demande d'entraide judiciaire au sens du présent Traité;
 - b) d'ouvrir une poursuite pénale; ou
 - c) de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.
2. L'autorité qui fournit l'information et les moyens de preuve peut, conformément à son droit national, soumettre son utilisation par l'autorité destinataire à certaines conditions. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.

ARTICLE 31
DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES ET DE CONFISCATION

1. Toute dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communications entre les Autorités centrales.
2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 27 s'appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 32
TRADUCTION

La transmission sans demande selon l'article 30 ainsi que la dénonciation selon l'article 31 sont traduites; leurs annexes sont toutefois dispensées de traduction.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33
AUTRES ACCORDS OU ARRANGEMENTS

1. Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur législation interne ou d'une pratique bien établie.
2. Les articles XV, XVI et XVII du Traité d'extradition entre la République Argentine et la Confédération suisse du 21 novembre 1906 sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 34
CONSULTATIONS

Si elles l'estiment nécessaire, les Autorités centrales échangeront, verbalement ou par écrit, des opinions au sujet de l'application ou l'exécution du présent Traité, de manière générale ou dans un cas particulier.

ARTICLE 35
REGLEMENT DE DIFFERENDS

Les différends entre les Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité seront réglés par la voie diplomatique.

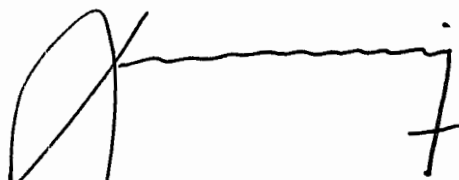
ARTICLE 36
ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION

1. Le présent Traité entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les Etats contractants se seront notifiés réciproquement l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2. L'un des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps en adressant à l'autre Etat un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception dudit avis. Cependant la dénonciation ne touchera pas les cas d'entraide judiciaire en cours.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

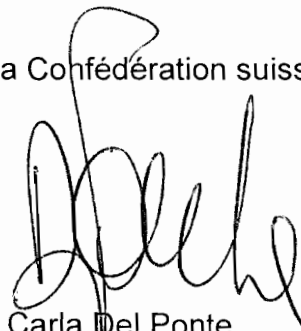
Ainsi fait à Buenos Aires, le 10 novembre 2009, en double exemplaire, en espagnol et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Argentine

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Jorge Enrique Taiana
Ministre des Affaires Etrangères,
Commerce International et du Culte

Pour la Confédération suisse

A handwritten signature in black ink, featuring a large, elegant loop at the top and a series of smaller, connected loops below.

Carla Del Ponte
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire